

Minería Ilegal en Venezuela: Muerte y Devastación en las Regiones del Amazonas y Orinoco

Moises Rendon, Linnea Sandin, and Claudia Fernandez

Mientras la crisis económica, humanitaria y política en Venezuela empeora, los grupos criminales, incluyendo las pandillas, los grupos guerrilleros de Colombia, y los colectivos (grupos paramilitares), compiten por el control de los valiosos recursos minerales del país. Estos recursos incluyen bauxita, coltán, diamantes y, en particular, oro. La minería ilegal está causando daños irreversibles al medio ambiente, alimentando abusos de los derechos humanos y creando amenazas de seguridad significativas para Venezuela y la región.

Al mismo tiempo, como las sanciones y el aislamiento diplomático aún no han impactado el control del poder de Nicolás Maduro, la minería ilegal plantea tres cuestiones fundamentales para los responsables políticos: (1) las implicaciones de una mayor inestabilidad en un estado ya fallido, (2) el impacto en políticas de sanciones y (3) el desafío de recuperar estos territorios de los grupos armados una vez que haya una transición.

RECOMENDACIONES

PARA EL GOBIERNO INTERINO Y EL GOBIERNO ENTRANTE EN VENEZUELA¹

- Involucrar la cooperación internacional y a la asistencia bilateral y multilateral para abordar la corrupción desenfrenada dentro de Venezuela, además de reformar, capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad del estado.
- Ubicar y detener las operaciones mineras ilegales a través de las siguientes acciones:
 - Confiscar o destruir equipos mineros;

¹A los fines de este informe, las recomendaciones están dirigidas tanto al gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, como a un gobierno elegido después de una transición hacia la democracia. Si bien la mayoría de las recomendaciones se pueden y se deben implementar de inmediato, otras no pueden implementarse completamente hasta el Día Después.

- *Bloquear las rutas de transporte;*
- *Trabajar con los gobiernos de Colombia y Brasil para resguardar las fronteras; y*
- *Colaborar con el gobierno de Colombia y la comunidad internacional para desmovilizar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).*
- *Ofrecer protección inmediata y ayuda humanitaria a las comunidades locales e indígenas afectadas por la minería ilegal.*
- *Asegurar que se establezca una comisión de la Verdad y Reconciliación la cual investigue los abusos de los derechos humanos relacionados con la minería ilegal*
- *Desarrollar e implementar políticas de salud pública para mitigar la propagación de la malaria, el dengue y otras enfermedades transmitidas por el agua a causa de la minería ilegal.*
- *Trabajar con la Asamblea Nacional para aprobar e implementar legislación que prohíba las operaciones mineras no reguladas y destructivas en todo el sur de Venezuela.*
- *Colaborar con las comunidades locales e indígenas para reinvertir las ganancias de los recursos minerales en las zonas subdesarrolladas del sur de Venezuela.*

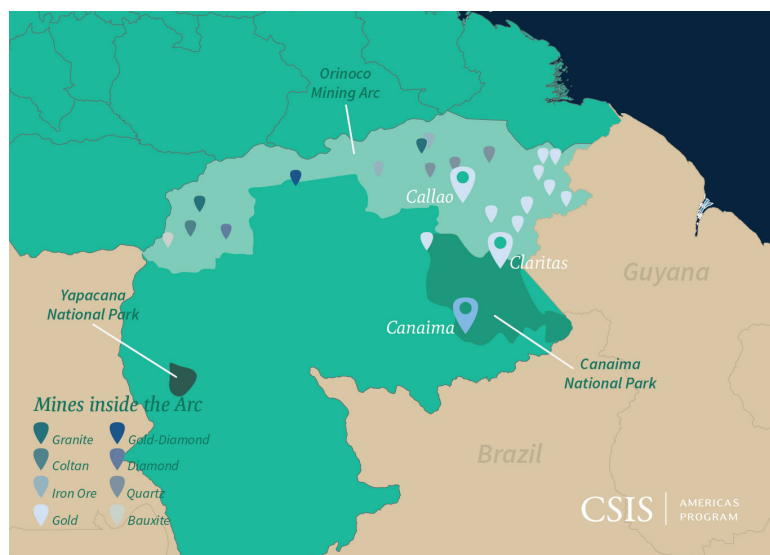
PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

- *Ampliar las regulaciones y cumplimiento de normas para las compañías que importan oro, diamantes, coltán y otros minerales raros que se sospecha que provienen de origen venezolano (incluso de Venezuela, estados vecinos e islas del Caribe).*
- *Colaborar con países vecinos, especialmente Colombia y Brasil, para asegurar sus fronteras con Venezuela.*
- *Presionar a los países de tránsito, incluyendo las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, para que dejen de importar oro y otros minerales venezolanos.*
- *La Unión Europea, además de países como Noruega (un importante mediador entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional), debe priorizar la preservación de la región amazónica en Venezuela cuando se relaciona con el régimen de Maduro.*
- *Las ONGs deben realizar una evaluación de impacto ambiental para evaluar el alcance de la devastación de la Amazonía venezolana debido a la minería ilegal.*
- *Las ONGs internacionales de derechos humanos y medioambientales, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, deben realizar una campaña mundial de conciencia pública sobre los múltiples efectos devastadores de la minería ilegal en Venezuela y la región.*

ANTECEDENTES: EL ARCO MINERO DEL ORINOCO

En el 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció que estaba considerando abrir una gran franja del territorio del sur de Venezuela a las actividades mineras. En 2016, cuando la economía de Venezuela entró en crisis, el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, implementó oficialmente esta visión. El régimen de Maduro seccionó el 12 por ciento del territorio del país y lo etiquetó como el Arco Minero (“Arco Minero del Orinoco”). El Arco Minero, aproximadamente del tamaño de Portugal, se extiende por los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y es un área rica en minerales. El área contiene bauxita (utilizada para la producción de aluminio), coltán (utilizado en la producción de muchos dispositivos electrónicos), dia-

mantes industriales y, lo más importante, oro. La región también cuenta con algunas de las áreas con mayor biodiversidad de la selva amazónica y limita con el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



El Arco Minero se convirtió rápidamente en un centro de minería ilegal, donde actores armados no estatales y pandillas locales compiten por el control de las operaciones mineras clave. El régimen de Maduro ha utilizado las empresas estatales y las fuerzas de seguridad para legitimar la extracción de minerales de otro modo criminal, colaborando con grupos criminales para extraer, procesar y transportar minerales. La minería ilegal se extiende mucho más allá de los límites del Arco Minero, con actividad minera reportada dentro de los Parques Nacionales Canaima y Yapacana, junto con varias otras áreas protegidas.

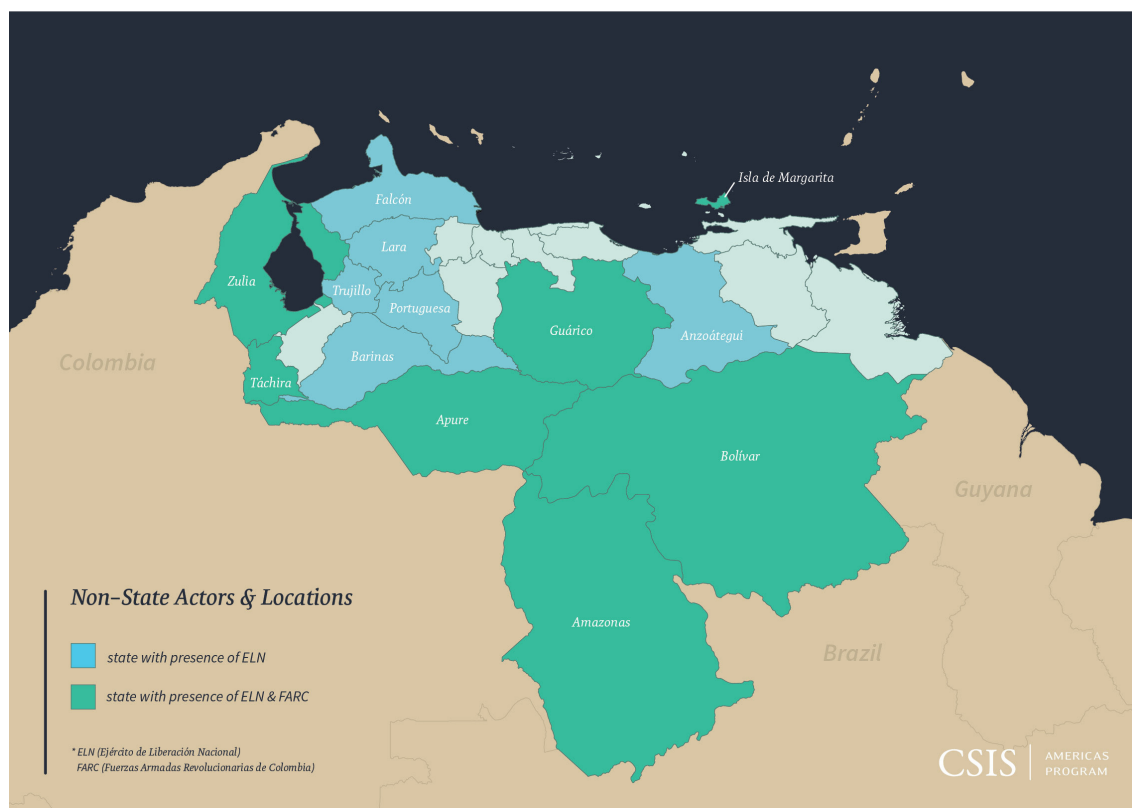
¿CÓMO APOYA LA MINERÍA ILEGAL AL REGIMEN DE MADURO?

El régimen de Maduro se beneficia directa e indirectamente de la minería ilícita. En el sector minero semi-oficial están involucradas las empresas estatales, como Minerven y la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), las cuales obtienen minerales de minas ilícitas y los exportan oficialmente a otros países, especialmente Turquía y Los Emiratos Árabes Unidos. Algunos beneficios de estos oficios van directamente a las arcas del régimen de Maduro, dándole el dinero necesario para evadir la presión financiera internacional.

En el sector minero semioficial están involucradas las empresas estatales que obtienen minerales de minas ilícitas y las exportan oficialmente a otros países, especialmente Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, estas operaciones semioficiales solo representan un pequeño porcentaje de las exportaciones de oro de Venezuela. La mayoría del oro extraído ilícitamente sale de Venezuela como contrabando y luego se formaliza en el mercado global, con el régimen de Maduro extrayendo muchos de los beneficios. En casi cada etapa del proceso minero, las fuerzas de seguridad del estado toman su corte de los beneficios, alimentando lo que ahora es uno de los países más corruptos del mundo. Por ejemplo, dado que el ejército controla el suministro de combustible en la región, se beneficia vendiendo combustible a los sindicatos y las guerrillas que operan las minas, que consumen mucho combustible. Según los informes, tanto el ejército como la guardia nacional operan numerosos puntos de control a lo largo de rutas de transporte ilícitas, donde recogen sobornos en efectivo y oro. Finalmente, los minerales salen de Venezuela con la ayuda de las

fuerzas armadas venezolanas, que facilita los vuelos clandestinos a cambio de sobornos. En un entorno político altamente polarizado, estas prácticas ayudan al régimen de Maduro a asegurar la lealtad de los militares. Para un soldado o guardia, un puesto en el estado Bolívar o el estado Amazonas rep-



Las FARC y el ELN han establecido una presencia fuerte en todo Venezuela.

resenta una oportunidad extremadamente lucrativa en una economía fallida. Las ganancias son exponencialmente más altas para los generales del ejército en el área, algunos de los cuales reciben el equivalente en oro de hasta \$ 800,000 por mes en sobornos. Maduro también ha utilizado la minería para asegurar la lealtad de los líderes políticos. En noviembre de 2019, anunció que otorgaría a cada uno de los 19 gobernadores chavistas en Venezuela el control directo sobre una mina de oro y que las ganancias podrían usarse para complementar los presupuestos locales.

La mayor parte del oro se legaliza de manera fraudulenta después de ser introducida de contrabando en Colombia, Brasil y Guyana, entre otros países. Por ejemplo, actores armados no estatales pasan el oro como contrabando a través de la frontera colombiana utilizando barcos fluviales, aviones privados, camiones o venezolanos refugiados que trabajan como “ mulas “. Una vez en Colombia, el oro se lava y se falsifica como oro legal colombiano antes de ingresar al mercado global. Otra ruta involucra el Caribe Holandés. Por ejemplo, el oro extraído ilegalmente llega a Curazao, donde es manejado por empresas de fundición y comercialización de oro que se encuentran dentro de la zona de libre comercio de la isla. Los comerciantes de oro luego falsifican papeles de aduana para ocultar el verdadero origen del oro antes de exportarlo al mercado global.

El oro de sangre venezolano termina en el Medio Oriente, Europa, África y los Estados Unidos.

La mayor parte del oro se legaliza de manera fraudulenta después de ser introducida de contrabando en Colombia, Brasil y Guyana, entre otros países.

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS EN EL ARCO MINERO

Los Pranes (líderes de pandillas carcelarias), las megabandas (grandes organizaciones criminales de pandillas con más de 50 miembros), sindicatos (pandillas originalmente conectadas a poderosos sindicatos), los colectivos (grupos paramilitares), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Las Fuerzas de Colombia (FARC) operan en la región. Los sindicatos tradicionalmente han controlado las minas ilegales en el Arco, pero se enfrentan a una competencia cada vez mayor de otros grupos violentos, especialmente el ELN. Aunque los disidentes de las FARC y el ELN han usado a Venezuela como un refugio seguro durante décadas, más recientemente han ampliado sus actividades ilegales para incluir la minería ilegal. Después de que se firmaron los acuerdos de paz en Colombia en noviembre de 2016, Venezuela se convirtió en un refugio para los disidentes y líderes de la FARC que se habían desilusionado con el manejo del proceso de paz por parte del gobierno colombiano. Según los informes, varios líderes de alto perfil de la FARC han comenzado a reagruparse en Venezuela y están utilizando los ingresos de actividades como la minería ilegal para fortalecer su poder.

Según múltiples fuentes, es típico que los grupos armados en el Arco Minero impongan “ impuestos ” (sobornos) tanto a los mineros como a las comunidades locales. Los sindicatos extorsionan a las comunidades locales y con frecuencia extorsionan a los dueños de negocios y los mineros, generalmente esperando el pago en oro. Aunque los sindicatos aún controlan la mayoría de las minas, el ELN ha expandido su control durante el año pasado. Algunas minas son controladas directamente por colectivos . El ELN también controla varios corredores de transporte importantes en el área y con frecuencia administra las cadenas de suministro de equipos en la región. Tanto el ELN como las FARC cobran a los sindicatos por utilizar corredores de transporte y equipos de minería. Esto ha enriquecido a ambos grupos, ya que, según los informes, el ELN gana al menos el 60 por ciento de sus ingresos de las actividades mineras en Colombia y Venezuela y las FARC ganan hasta el 50 por ciento de sus ingresos de las actividades mineras en Venezuela.

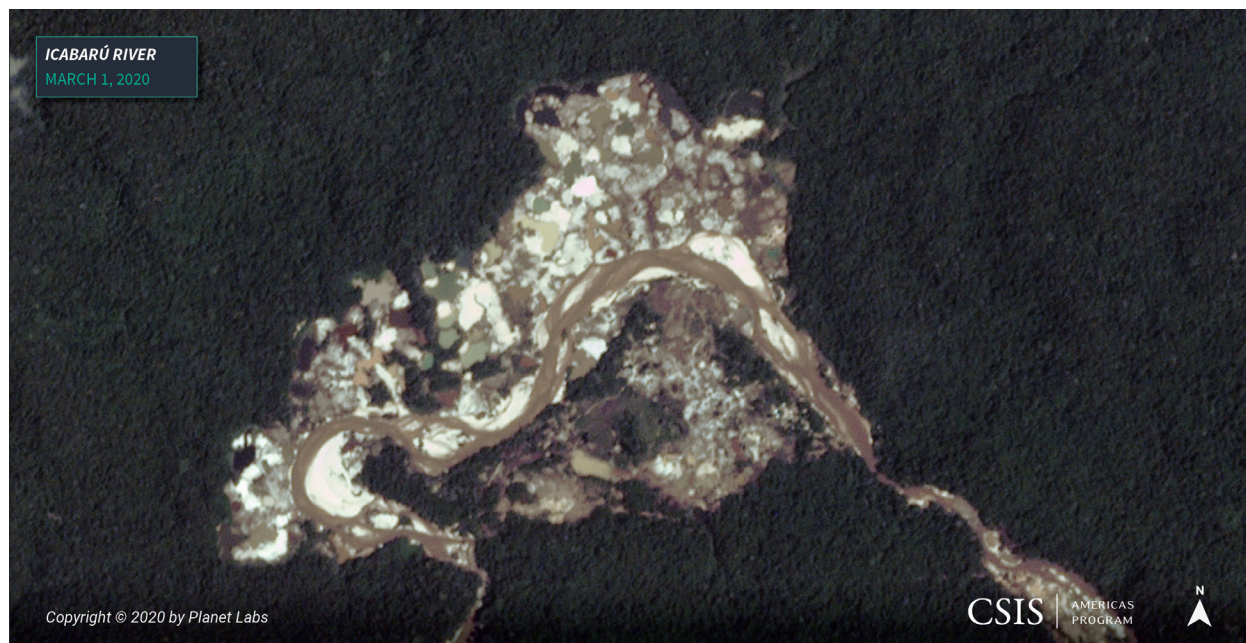
EPISODIO DE PODCAST

El Impacto devastador de la minería ilegal en Venezuela

EL IMPACTO DE LA MINERÍA ILEGAL EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA REGIÓN AMAZÓNICA

El Arco Minero se cruza con la selva Amazónica venezolana, un área de biodiversidad que contiene 36 áreas protegidas, incluidos parques y monumentos nacionales. Esta selva tropical está siendo talada ilegalmente para dar paso a minas, caminos y campamentos mineros. En los cuatro años posteriores a la creación del Arco Minero, más de 2.821 kilómetros cuadrados (aproximadamente 1.090 millas cuadradas) de bosque han sido destruidos, el 50 por ciento de esa área en “territorios protegidos”. Aunque la minería es ilegal en los parques nacionales de Venezuela, se ha informado de minería en Canaima, Yapacana y muchos otros parques nacionales y sus alrededores. También se ha informado sobre minería en la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco- Casiquiare, un área protegida que alberga al pueblo yanomami y otros pueblos indígenas. Aunque el sur de Venezuela alberga 34 comunidades indígenas que han estado involucradas durante mucho tiempo en la preservación del medio ambiente, no fueron consultadas antes de que el régimen de Maduro implementara políticas públicas para promover la minería en la región. Se han reportado varias minas dentro del Parque Nacional Yapacana en el estado de Amazonas.

En los cuatro años posteriores a la creación del Arco Minero, más de 2.821 kilómetros cuadrados de bosque han sido destruidos, el 50 por ciento de esa área en “territorios protegidos”.





Hay varias minas a lo largo del río Icabarú cerca de la frontera con Brasil.

Además de la deforestación en el área, el proceso minero también ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente circundante. El mercurio se usa comúnmente en la minería de oro en Venezuela, y ya se han encontrado altos niveles del elemento en ríos cercanos que proporcionan agua potable para Colombia y Brasil y fluyen dentro del Parque Nacional Canaima. También se han encontrado niveles elevados de mercurio en peces de agua dulce de la región, que se exportan para el consumo en Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago. A medida que la minería ha proliferado, los relaves cargados de mercurio y los sedimentos de las minas se han filtrado en vías fluviales clave, incluido el río Caroní. Este río desemboca en la planta hidroeléctrica de Guri, que suministra más de la mitad de la electricidad del país. Los relaves y los sedimentos han contribuido al daño en las turbinas y esclusas de la planta, reduciendo la capacidad de la planta para generar electricidad a medida que el resto de la infraestructura eléctrica del país colapsa.

El complejo minero Las Claritas, dirigido por grupos armados ilegales, se ha expandido desde 2016.

EL IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SALUD

Aproximadamente 500,000 trabajadores están involucrados en operaciones mineras ilegales, muchos de ellos de comunidades indígenas locales que han sido obligados a trabajar por amenazas de violencia o por necesidad económica. Estos mineros en su mayoría son venezolanos empobrecidos, y se estima que el 45 por ciento son menores de edad. Trabajan en condiciones deplorables bajo la amenaza de castigo por grupos armados y pandillas. Aquellos empleados en las minas, en su mayoría hombres y niños, son sometidos regularmente a atrocidades a manos de los propietarios de minas. Los mineros que desobedecen o se enfrentan con grupos armados en la región son mutilados o se les amputa los brazos y las manos, se les amenaza que se los violara en grupo o serán asesinados. Se han reportado docenas de masacres en el estado de Bolívar, así como informes de fosas comunes en el área. Las comunidades indígenas que han intentado resistirse a la minería ilegal han sido violentamente reprimidas u obligadas a huir de sus hogares ancestrales.

Estos mineros en su mayoría son venezolanos empobrecidos que han sido gravemente afectados por la crisis humanitaria, y se estima que el 45 por ciento son menores de edad.



Foto b por FEDERICO PARRA / AFP vía Getty Images

Vista aérea de una mina ilegal ubicada en el Parque Nacional Caima, Estado Bolívar, Región Gran Sabana, Sureste de Venezuela.

Los hombres y niños que trabajan en las minas no son los únicos que han sido explotados debido a la minería ilegal. El tráfico sexual de mujeres y niñas se ha convertido en un **problema importante**. Las víctimas son obligadas a realizar trabajo sexual o consideran que es su única opción de empleo. Los niños están especialmente en riesgo de ser traficados en el área. Hay informes de que la edad promedio de las víctimas de trata sexual es de 13 a 14 años. Las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA, han aumentado considerablemente en la región debido a la explotación sexual.

El agua estancada y las condiciones insalubres en los sitios mineros han aumentado exponencialmente las enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos en la población local. Aunque Venezuela fue el primer país de América Latina en erradicar la malaria, la enfermedad ha regresado a un ritmo asombroso. La OMS informó 323,392 casos de malaria en Venezuela entre enero y octubre de 2019, y el 10 por ciento de la población en el estado de Bolívar dio positivo por la enfermedad. La malaria causa el 21 por ciento de las muertes en el estado de Amazonas y el 25 por ciento de las muertes en el estado de Bolívar. La medicación a menudo es difícil de conseguir, aunque se puede comprar con oro en el mercado negro. Las condiciones cerca de las minas también han contribuido a picos de difteria, fiebre amarilla, dengue y chikungunya. Además, a medida que el mercurio de la minería se ha infiltrado en el suelo y los sistemas de agua, las poblaciones indígenas locales han estado expuestas a niveles peligrosos. En la cuenca del río Caura, un afluente del Orinoco, el 92 por ciento de las mujeres indígenas tenían niveles elevados de mercurio, lo que podría dañar el riñón y el cerebro e impedir el desarrollo fetal.

RECOMENDACIONES PARA VENEZUELA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El régimen de Maduro se beneficia de la minería ilegal, y por lo tanto no tomará medidas para detenerla. Sin embargo, aunque la minería ilegal ha proliferado bajo el régimen de Maduro, es probable que el problema continúe incluso después de un cambio de gobierno. Un gobierno del “Día Después” tendrá que

aceptar el hecho de que el estado venezolano nunca ha tenido una presencia fuerte en el sur del país. Para muchos en esta región, los sindicatos, el ELN, las FARC y otras pandillas son lo más cercano al “gobierno” que jamás hayan experimentado. La comunidad internacional desempeñará un papel vital en el apoyo a un gobierno del “Día Después” para construir la capacidad del estado y restablecer la confianza con las comunidades en el sur de Venezuela. Los Estados Unidos, la Unión Europea y las organizaciones multilaterales pueden proporcionar recursos financieros destinados a expandir las capacidades del estado en la región, mientras que otros países, incluido Colombia, pueden compartir lecciones aprendidas en sus propios esfuerzos para desarrollar la capacidad del estado.

Poner fin a la minería ilegal será un proceso costoso y desafiante. Estas minas son remotas y están estrechamente vigiladas por grupos armados. En la medida de lo posible, el gobierno interino liderado por Juan Guaidó y el gobierno entrante o del “Día Después” deben ubicar y detener las operaciones mineras ilegales, confiscar o destruir equipos mineros ilegales, bloquear las rutas de transporte y trabajar con Colombia, Brasil y Guyana para asegurar las fronteras, todo sin poner en peligro la seguridad de las comunidades indígenas locales. Hacer esto requerirá recursos y capacidad técnica que el estado venezolano no tiene. También implicará desmovilizar o expulsar a los disidentes del ELN y las FARC, dos grupos que históricamente han tenido éxito en conflictos prolongados de baja intensidad. Estos esfuerzos tácticos deben complementarse con una campaña pacífica para establecer la justicia y el estado de derecho en Venezuela, así como para reformar y profesionalizar a los militares corruptos del país.

Además, la creación de una comisión de la verdad y reconciliación, y un sistema de justicia de transición deberán buscar una justa y equilibrada responsabilidad por los crímenes cometidos, respaldado por la cooperación y derecho internacional. Los graves abusos contra los derechos humanos y los delitos ambientales que han resultado de la minería ilegal deben abordarse de inmediato. Además, el gobierno entrante debe garantizar la protección inmediata y la ayuda humanitaria a las comunidades indígenas actualmente atrapadas por el sistema de minería ilegal. Las comunidades mineras deben ser incluidas en los esfuerzos de verdad y reconciliación, y las víctimas de abusos contra los derechos humanos deben tener acceso a un sistema de justicia justo y a las reparaciones.

El gobierno entrante estará desesperado por obtener ingresos, ya que responde a una grave crisis humanitaria e intenta reconstruir el país. Venezuela tiene una gran riqueza mineral, y estos minerales pueden ser la mejor oportunidad para que el país financie la recuperación. Sin embargo, cuando un día después el gobierno busca inversión extranjera en los recursos minerales del sur de Venezuela, debe hacerlo correctamente. Primero, en el primer día del gobierno entrante, el gobierno debe derogar el decreto del Arco Mineiro mientras avanza la legislación vigente de la Asamblea Nacional, como la Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazona, que está en línea con los estándares internacionales para protección del medio ambiente. Un gobierno democrático debe priorizar la sostenibilidad, obtener el consentimiento de las comunidades indígenas locales y garantizar que las ganancias se inviertan directamente en el sur rural históricamente subdesarrollado.

PASOS QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PUEDE TOMAR INMEDIATAMENTE

Mientras que un gobierno entrante tendrá que promulgar varias políticas para combatir la minería ilegal en Venezuela, la comunidad internacional puede marcar la diferencia ahora para mitigar el alcance de la devastación mientras tanto. Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones individuales y sectoriales contra el régimen de Maduro, dando al gobierno interino liderado por Juan Guaidó más influencia. Sin

embargo, la minería ilegal expone un defecto clave en el programa de sanciones sectoriales de los Estados Unidos. A medida que el sector petrolero oficial continúa siendo sancionado, el régimen de Maduro ha podido adaptarse y recurrir a actividades ilícitas. Por lo tanto, la crisis minera ilegal debería servir como un recordatorio para los responsables políticos de los Estados Unidos. De que deben pensar más allá de las sanciones y utilizar otras herramientas, incluidas las acusaciones y las regulaciones ampliadas de debida diligencia, para cambiar la percepción global, dismantlar el régimen de crimen organizado del régimen de Maduro y evitar una mayor minería ilegal.

Los Estados Unidos y la Unión Europea pueden presionar a los países para que no se involucren en el comercio ilegal de oro de Venezuela. Los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que continúan importando oro venezolano, deberían estar entre los primeros en participar. Aún más importante, los Estados Unidos y Europa deberían tomar medidas para presionar y proporcionar asistencia técnica a aquellos lugares que se utilizan como escalas para el oro venezolano, como Colombia y las islas Holandesas de Aruba, Bonaire y Curazao.

En los casos de Colombia y Brasil, se necesitan fronteras más seguras. Las fronteras de Venezuela con ambos países son notoriamente porosas. El contrabando y las personas han circulado durante mucho tiempo entre esos países con pocos desafíos. Dado el tamaño de estas fronteras y el volumen de bienes que se trafican, ambos países necesitarán el apoyo técnico de la comunidad internacional para evitar el contrabando de oro venezolano. Una forma importante de detener el contrabando de oro desde Venezuela sería mejorar la seguridad en las fronteras, y esto es algo que Colombia y Brasil podrían comenzar a hacer en colaboración con el gobierno interino y la Asamblea Nacional. Esto detendría al menos algunos de los flujos de oro ilegal y otros minerales desde Venezuela y complicaría las cadenas de suministro de maquinaria y productos químicos para la minería como el mercurio.

La comunidad internacional también debe enfatizar el factor ambiental de esta crisis. Para los países que han estado trabajando para abordar el impacto causado por el hombre en el medio ambiente, la minería ilegal en Venezuela representa una amenaza crítica. Noruega, por ejemplo, ha sido un defensor del medio ambiente y ha sido un mediador neutral entre la comunidad internacional y el régimen de Maduro. Dado su papel de mediador, Noruega debería responder a la devastación de la Amazonía venezolana y sus comunidades locales durante las conversaciones con el régimen de Maduro.

Además, aunque es imposible saber realmente el alcance de la devastación en la Amazonía venezolana sin una evaluación de impacto ambiental, esta es otra oportunidad para que la comunidad internacional se comprometa con esta crisis. La Amazonía de Venezuela no debe ser ignorada, incluso si protegerla es más difícil que protegerla en otros países. Las ONGs ambientales deben tratar de comprender el alcance de la degradación ambiental en la Amazonía venezolana, por ejemplo, trabajando con grupos locales de la sociedad civil que han asumido esta tarea. Las ONGs ambientalistas pueden desempeñar un papel importante en la recopilación de datos e investigaciones confiables y en la sensibilización mundial. Esto ayudaría no solo a hacer sonar la alarma en la comunidad internacional, sino también a guiar los esfuerzos del gobierno entrante para restaurar las áreas de la Amazonía que se han perdido o están en grave peligro.

Finalmente, las organizaciones multilaterales también deben desempeñar un papel para poner fin a la crisis minera ilegal de Venezuela. Las agencias de las Naciones Unidas como el PNUMA, ONU Mujeres y la UNESCO pueden aumentar la conciencia mundial sobre esta crisis y estimular la inversión de las ONG ambientalistas y de derechos humanos.

Moisés Rendon es director de la Iniciativa Futuro de Venezuela e investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC. Linnea Sandin es la directora asociada e investigadora adjunta del Programa de las Américas en CSIS. Claudia Fernández es pasante de la Iniciativa Futuro de Venezuela de CSIS.

Los autores agradecen a Cristina Burelli , asesora y enlace internacional de SOS Orinoco y a Juan Cruz, asesor principal de CSIS, por proporcionarnos información valiosa y revisar borradores anteriores de este informe. Los autores agradecen a Bram Ebus , consultor del International Crisis Group, por agregar nuevas ideas y complejidad a estos problemas, y a Margarita R. Seminario , subdirectora e investigadora senior de las Américas, por revisar un borrador anterior de este informe. Los autores desean agradecer además al Dracopoulos iDeas Lab por su trabajo en este informe, especialmente Jeeah Lee, Elizabeth Richardson, Joseph Bermudez y Bonny Lee.

Este informe es posible gracias a la colaboración con Freedom House.

Los CSIS Briefs son producidos por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada sin fines de lucro cuya labor se centra en materia de relaciones internacionales y política pública . Su investigación es no partidista y no propietaria. CSIS no toma posiciones políticas específicas. Por lo tanto, todas las opiniones, punto de vista y conclusiones expresadas en esta publicación deben entenderse como propiedad exclusiva de los autores.

© 2020 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Todos los derechos reservados

-